

EL PAPEL PROTAGÓNICO DEL DERECHO DE INFORMACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÁNEAS Y SU NECESARIO RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL

Rafael Cantoni Briceño

Abogado, Docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

1. DEMOCRACIA, DERECHO DE INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

A veces, al leer los titulares de los periódicos en las calles pueden hacerle pensar a uno hasta dónde puede llegar el derecho de los medios en su libertad de expresión, crítica o denuncia.

Al respecto hay tres posiciones respecto al ejercicio de la libertad de expresión. Las absolutas, reclaman una ilimitada libertad de expresión política y no política. En nuestro entorno constitucional, y seguramente en ningún país de la tierra, se puede reconocer una manera tan omnímoda de entender la dicha libertad. La segunda, maximalista, reivindican absoluta libertad de expresión referida a ideas políticas; y relativa, es decir, limitada por otros valores sociales, la libertad de expresión en las demás esferas intelectuales de la vida. Por último, La relativista, sustenta una limitación o ponderación de la libertad de expresión en relación con otros valores sociales.

Cabe entonces plantearnos las preguntas: ¿qué tan necesaria resulta la libertad de expresión dentro del contexto democrático?, ¿Hasta dónde debe llegar la libertad de expresión?, ¿cuáles son sus límites?, ¿cuándo podemos restringir la libertad de expresión, sin descontextualizar el sistema democrático?, ¿acaso debemos propender a una libertad de expresión irrestricta para evitar la posibilidad de un deterioro en la calidad democrático?

El tipo maximalista es el que presenta cierta actualidad en nuestros días. Su aspecto más vulnerable es el intento de separación entre ideas políticas (libertad de expresión absoluta) y libertad de expresión en los demás campos, que habría que poner en relación con otros valores sociales, como la honestidad, decencia, moralidad y el orden público. Presenta el enorme inconveniente de deslindar con cierta nitidez lo que son ideas políticas y lo que no lo son, además de la justificación política de tal diferenciación. (Aguilar, 1990: 14).

Los siete elementos constitutivos de la democracia tienen intrínsecos de una forma u otra los derechos de información y expresión. Los atributos de la democracia política son totalmente dependientes del cumplimiento previo de esos derechos. En otras palabras, sin el cumplimiento y garantía jurídica de esos "derechos de información" no se podrá señalar a un régimen político como democrático.¹

¹ Los atributos de la democracia política, o poliarquía, enunciados por Dahl (1992:267) son:

- 1) Cargos electos;
- 2) Elecciones libres y justas;
- 3) Sufragio universal;
- 4) El derecho de presentarse como candidato a un cargo;
- 5) Libertad de expresión;
- 6) Información alternativa; y
- 7) Autonomía asociacional.

Consideramos la definición de Dahl lo suficientemente clara y útil para darnos criterios sobre diversas realidades democráticas y diferenciarlas de otras realidades donde el proceso no existe o existe con graves deficiencias.

Para ser más precisos, cuando mencionemos el término Democracia, a lo que nos referiremos es al cumplimiento de los siete requisitos señalados inicialmente. La conceptualización de Robert Dahl sería el marco necesario para poder referirnos a un régimen que podemos considerar y evaluar como perteneciente a la "especie" de la democracia y a partir de ahí, se podría evaluar su intensidad o calidad. Estos siete requisitos serían los mínimos, los que diferencian a un régimen donde se celebran elecciones periódicas justas de los que no. La poliarquía no es una definición que tenga relación con la igualdad social ni la distribución de riqueza, sino que tan sólo exige requisitos mínimos, para procesar decisiones y mantener un "piso suficiente" al que se le puedan agregar otras exigencias o escalones de mejoramiento de la calidad de vida de los gobernados.

El paso siguiente, es definir qué es lo que entendemos precisamente por derecho de información y libertad de expresión y poder diferenciarlos: El concepto de libertad de expresión engloba y es originario de la libertad de pensamiento, y libertad ideológica cuando su objeto son las ideas políticas, en sentido restringido. La libertad de pensamiento tenía su razón de ser, cuando esta libertad interior del individuo, era acosada y reprimida por el poder, a fin de que ciertos pensamientos no se produjesen. (Aguilar, 1990: 7-8).

La libertad de prensa o información es la derivación necesaria de la vigencia de la libertad de expresión. En la actualidad son grupos sociales y empresariales los que ejercen el derecho a informar desde su particular opinión política. Es exigible que esos grupos sociales y empresariales reflejen la pluralidad de la sociedad a la que se dirigen. (Aguilar, 1990: 3).

Observemos comparativamente estos derechos de información, con sus elementales características constitutivas que posteriormente se analizarán con mayor detalle:

Derecho de Información	Libertad de expresión
- Consiste en el relato de los hechos sucedidos.	- Consiste en exponer pensamientos, opiniones, ideas, juicios de valor.
- Los hechos pueden ser probados, admiten medios de prueba.	- No admite medios de prueba al constituir difusión de ideas y opiniones.
- Requiere como contenido esencial: la veracidad de los hechos.	- No es posible el atributo de la veracidad, al constituir un juicio de valor.

Cuadro de elaboración propia.

La veracidad exige al menos, una comprobación razonable. Los datos transmitidos deben haber sido comprobados, es decir, que ha habido "diligencia" en la comprobación de los datos antes de su difusión.

La diferencia entre libertad de expresión y la libertad de prensa, se refiere a la exigencia de veracidad para esta última. La veracidad opera como un límite al derecho a comunicar y recibir información, no es exigible respecto de la libertad de expresión, en cuanto la manifestación de ideas y opiniones no entren en conflicto con otros derechos constitucionalmente protegidos.

Respecto a la distinción entre libertad de expresión y libertad de información, el derecho de comunicar información en cierto sentido, puede considerarse como una simple aplicación concreta de la libertad de expresión, y el derecho a recibir esa misma información". El derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", es un tipo de derecho fundamental diverso del que consiste en expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones, en aras del interés colectivo en el conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y que sean necesarios para que sea real la participación de los ciudadanos en la vida colectiva....El objeto de este derecho es por consiguiente el conjunto de hechos que puedan considerarse noticiables o noticiosos...". (Escobar, 1998: 291).

El derecho a la libertad de expresión versa sobre pensamientos, ideas y opiniones, en tanto que el derecho a la libertad de información se basa en la comunicación informativa de hechos veraces y noticiables. Esta distinción tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad de ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos, por su materialidad, son susceptibles de prueba, los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, no se prestan, por su naturaleza abstracta, a una demostración de exactitud.

La libertad de información tiene dos facetas: el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión (activa), y el derecho a recibir aquélla libertad de información (pasiva), a las que habría que añadir la libertad de

creación y gestión de empresas informativas.

Es imprescindible en el ejercicio de este derecho el respeto a la veracidad de las informaciones difundidas. La libertad de expresión es más amplia que la libertad de información por no operar, en el ejercicio de aquella, el límite interno de veracidad. Lo que se exige es que la conducta del informador sea diligente en la averiguación de los hechos. La comunicación protegida es la información "veraz" y eso no significa privar de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas sino que se exige un deber de diligencia sobre el informador, a quien se le puede exigir que lo que transmita como "hechos" haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos. El ordenamiento no puede tutelar las conductas negligentes, ni la comunicación de rumores o peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aún cuando su total exactitud sea controvertible. Las informaciones erróneas son inevitables en un debate libre. (Escobar, 1998: 293).

Los hechos noticiables sobre los que cabe el derecho de información y la libertad de expresión son aquellos hechos con trascendencia pública por sí mismos, es decir, aquellos sucedidos en lugares públicos o en instituciones públicas, con relación al dinero público, aunque se vean involucradas personas privadas. También son hechos en relación con personas con relevancia pública, refiriéndonos a las que ejercen cargos públicos, o funcionarios públicos, profesionalmente públicos, personas privadas que persiguen notoriedad pública (ejemplo: que venden su vida privada) o personajes privados que en virtud de un acontecimiento público se vuelve pública. También es noticiable la crítica de las Instituciones del Estado.

Tanto el derecho de información como la libertad de expresión son derechos de contenido institucional al estar por encima de interés individual. Las libertades de expresión e información garantizan un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, de ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los

pilares de una sociedad libre y democrática.

Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda tener opiniones diversas e incluso contrapuestas. El derecho a la información no sólo protege un interés individual sino que entraña el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político (Escobar, 1998: 44).

No se requiere mayor análisis para poder afirmar que entre las instituciones políticas que se requieren para una democracia están la libertad de expresión y las fuentes alternativas de información.

Respecto a la libertad de expresión, es necesario que los ciudadanos tengan derecho a expresarse, sin peligros, sobre asuntos políticos, definidos en sentido amplio, incluyendo la crítica de los cargos públicos, el gobierno, el régimen político, el orden socio económico, y la ideología prevaleciente. Respecto al acceso a fuentes alternativas de información, los ciudadanos deben tener el derecho de solicitar fuentes de información alternativa e independiente de otros ciudadanos, expertos, periódicos, revistas, libros, telecomunicaciones y similares. Uno debe poder tener acceso sencillo a fuentes que no estén bajo el control del gobierno u otro grupo político individual que intente influir sobre los valores y actitudes políticas públicas, y esas fuentes alternativas deben estar protegidas por la ley. (Dahl, 1998: 100).

Para que los ciudadanos puedan participar efectivamente en la vida política, deben estar en condiciones de escuchar lo que otros tienen que decir. La libertad de expresión no significa solo que alguien tenga el derecho de ser oído. Presupone que alguien tenga el derecho a escuchar lo que otros tengan que decir. Es necesario esto para una comprensión ilustrada de las acciones y políticas gubernamentales (Dahl, 1998: 112). Agregaría necesariamente, que alguien tenga derecho también a no escuchar lo que otros dicen, si no está de acuerdo, o discrepa con el mensaje esto es particularmente difícil cuando existe abrumadora información o difusión de ideas en un solo sentido, en manos de

un grupo dominante que controla los medios por su poder económico o político. Ejemplos nos sobran: la saturación informativa o publicitaria de un partido gobernante aspirante a la reelección, el uso de medios o recursos públicos en forma asimétrica respecto a otros competidores en la competencia electoral, que antes de realizarse en las ánforas se realiza a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión.

Los ciudadanos precisan de oportunidades para expresar sus propios puntos de vista; para aprender unos de otros; para entablar discusiones y deliberaciones; para leer y escuchar e inquirir a los expertos, a los candidatos políticos y a las personas en cuyo juicio confían; y para aprender por otros medios que se sustentan sobre la libertad de expresión. Sin la libertad de expresión los ciudadanos enseguida acabarían perdiendo su capacidad de influir en la agenda de las decisiones políticas. (Dahl, 1998: 112)

Algunos sostienen que una de las funciones de la libertad de prensa, manifestación de la libertad de expresión, es ejercer como contrapoder. Para ellos esa función corresponde también a los medios de comunicación. (Aguilar, 1990: 4).

Dentro de razonables límites de tiempo, todo ciudadano debe tener oportunidades efectivas e iguales de llegar a conocer las políticas alternativas y sus posibles consecuencias. Para que esto sea posible debe la ciudadanía recibir un nivel de educación formal y además disponer información extendida relevante que pueden adquirir a través de los medios de comunicación. La competición política entre los aspirantes a cargos que se organiza mediante los partidos políticos se suma a la oferta, ya que los partidos y los candidatos proporcionan gustosamente información sobre sus logros e intenciones. (Dahl, 1998: 208-209).

La comprensión ilustrada se refiere a que no es posible que los ciudadanos adquieran la información que precisan para comprender los diferentes asuntos si el gobierno es el que controla todas las fuentes importantes de información; o, si un único grupo goza de un monopolio informativo. Los ciudadanos deben tener acceso a fuentes de información que no estén dominadas por el gobierno o domina-

das por algún otro grupo o concepción política específica. No hay ninguna posibilidad de participar efectivamente en la vida política si toda la información proviene de una única fuente, el gobierno, o un partido o facción o interés político (Dahl, 1998: 113). El "derecho a no oír", y por otro lado, el derecho a escuchar los que otros tienen que decir, como ya afirmamos, consagra la imperiosa necesidad de mantener constante la pluralidad informativa y la disponibilidad de información alternativa a la oficial. Los recursos políticos deben estar en manos de todos, no sólo de los grupos mayoritarios, influyentes o poderosos.

Los recursos políticos son todo lo que tenga acceso una persona o grupo y lo que puedan valerse para influenciar directa o indirectamente la conducta de otras personas. Dependiendo del tiempo y lugar, gran cantidad de aspectos de la sociedad humana pueden convertirse en recursos políticos: fuerzas físicas, armamento, dinero, riqueza, bienes y servicios, recursos productivos, ingresos, status, honor, respeto, afecto, carisma, prestigio, **información, conocimiento, educación, comunicación**, medios de comunicación, organizaciones, posición, orden legal, control sobre doctrinas y valores, votos, y muchos más (Dahl, 1998: 199).

La información y los medios de comunicación son recursos políticos, por lo que es menester para un gobierno democrático realizar esfuerzos en garantizar estos entornos de acceso a los recursos políticos con el fin de preservar el pluralismo político e informacional.

No es extraño que los gobiernos poco democráticos pretendan controlar los medios de comunicación de una forma u otra. Por otro lado si vemos como funciona un régimen de esta clase notaremos la falta de libertad de expresión o información alternativa, la cual derrumba la viabilidad de todo el modelo democrático.

La libertad de expresión y prensa es un asunto jurídico y político, es decir, constitucional. Su plena existencia define a un Estado democrático. Respecto a la libertad de prensa, la garantía de su resultado, el pluralismo político, por la propia dinámica de la economía de mercado, propende a condenar al silencio a los discursos minoritarios. Otra cir-

cunstancia proviene del poder político que puede sentirse amenazado por la crítica periodística de su política.

Hay que tener presente también que la preocupación de un pueblo por la mera subsistencia física, una renta per cápita situada en los límites de la pobreza y una numerosa clase baja cercana a la miseria, impiden o dificultan la existencia misma de la libertad de expresión, del pluralismo político, y consecuentemente, de la democracia (Aguilar, 1990: 1). Sin embargo si consideramos a los países democráticos sólo a los que cumplen requisitos de igualdad económica entre ciudadanos, estamos cambiando nuestra definición de democracia concibiéndola como un atributo del sistema y no como una democracia estrictamente política. Asimilar democracia a justicia social trae como consecuencia el menosprecio de las democracias existentes (la de los países que reúnen los requisitos de la democracia vertidos en este trabajo) y reduciríamos la democracia a un ideal inexistente en la realidad.

El planteamiento principal de este trabajo es realzar la centralidad de los derechos de información y la libertad de expresión para la creación del concepto "democracia" bastante flexible, es decir, el vertido aquí en las primeras páginas, analizando la relación directa que estos derechos tienen con cada uno de sus elementos constitutivos:

Cargos electos y derechos de información y libertad de expresión: el control de las decisiones en materia de política pública corresponde a funcionarios electos (Dahl, 1992: 267). Los funcionarios electos para poder tomar decisiones apropiadas requieren información de la realidad y conocimiento de los problemas reales que la afectan. Pueden tomar conocimiento de estos hechos por su propia cuenta a través de sus propios canales de información, así como de la propia ciudadanía o de los medios de comunicación, los cuales muchas veces dan alertas sobre determinadas situaciones y a partir de ahí se inicie la toma de medidas correctivas. Asimismo el control que de estos funcionarios tienen los ciudadanos, se puede realizar únicamente si existe información alternativa y crítica de la gestión gubernamental. Por otro lado, el parlamento, gracias a la obtención de información sobre las políticas gubernamentales, puede ejercer un me-

jor control de éstas y la minoría, de alguna forma, redireccionarla a través de los medios con los que cuenta.

Relación con las elecciones libres y justas: Los funcionarios son elegidos mediante el voto en elecciones limpias que se llevan a cabo con regularidad y normalmente, de forma libre, sin coacciones (Dahl, 1992: 267). Y la razón no puede surgir si no es a través de la libre discusión. Es necesario que haya posiciones enfrentadas para que pueda surgir la razón, es decir, es necesaria la libertad. Sólo así podrá aparecer la razón y su corolario el progreso en la vida humana. Esta libre discusión en los estados democráticos de derecho, se canaliza fundamentalmente por los partidos políticos y las elecciones (Aguilar, 1990: 1-2).

Relación con el sufragio universal: Casi todos los adultos tienen derecho a votar en la elección de los funcionarios públicos (Dahl, 1992: 267). Sólo mediante la obtención libre de información, el voto que se emita será libre, pues habrá de por medio una “comprensión ilustrada” de la realidad política, lo cual permitirá a los ciudadanos votantes comparar entre los candidatos que puedan conocer y hacer una elección habiendo podido evaluar entre las alternativas y programas.

Relación con el derecho de presentarse como candidato a un cargo: El derecho a presentarse tiene implícito el derecho a ser elegido. Para ser elegido en un cargo, debe haber una competencia por votos, y los medios de comunicación tienen un rol protagónico en la actualidad. A través de éstos, los ciudadanos forman sus opiniones sobre distintos problemas (...) (Abad Medina, 1999: 317).

Información alternativa y derechos de información: para la existencia de “información alternativa” es indispensable que sea efectivo el derecho de información y libertad de expresión, pues el ejercicio de estos derechos son los que producen tanto la información oficial como la no oficial en iguales condiciones y con iguales garantías, claro está, que las condiciones económicas pueden no ser iguales, pero esta variable no es materia del presente trabajo. Partimos que tanto el medio de comunicación, periódico, revista, etc. se encuentren en las mismas condiciones de salir al mercado y que los ciudada-

nos en forma libre opten por uno, otro o ambos, para realizar una “comprensión ilustrada” de la realidad política.

Relación derechos de información- autonomía asociacional: Para propender a la obtención o defensa de sus derechos (incluidos los ya mencionados), los ciudadanos gozan también del derecho de constituir asociaciones u organizaciones relativamente independientes, entre ellas partidos políticos y grupos de intereses (Dahl, 1992: 267). Para la existencia de los partidos políticos, partimos del supuesto que la autonomía asociacional se da plenamente.

2. LA REGULACIÓN JURÍDICA CONSTITUCIONAL PERUANA DE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

La Constitución de Perú en su artículo 2º.4 señala que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

Agrega que los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común, además precisa que es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente y que los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.

Entonces la Constitución reconoce cuatro libertades, la de información, expresión, opinión y difusión.

La libertad de información, comprende el derecho de informar y el de recibir información sobre diversos asuntos. Los límites se encuentran en la restricción de su circulación si median razones de seguridad o relacionada a la intimidad de terceros. La libertad de informar, implica también la posibilidad de negarse a informar en lo que concierne a los asuntos privados y que se desee mantener en

reserva. El tema de la información, está relacionado con otros derechos de carácter constitucional, como son el derecho a la intimidad o la seguridad nacional.

La libertad de opinión, es la que faculta a adoptar pensamientos propios y criterios particulares sobre personas y cosas. Es una libertad destinada a excluir la manipulación de las opiniones de las personas por otras personas o por el poder público. La libertad de opinión tiene consagración en el inciso 3 del artículo 2° de la Constitución, que señala que no hay delito de opinión. En tanto que la libertad de información se refiere conocer y dar a conocer situaciones diversas de la realidad, la libertad de opinión consiste en formarse un criterio propio sobre cualquier aspecto de la vida.

La libertad de expresión, consiste en poder transmitir pensamientos, ideas y opiniones. Hay que saber diferenciar que la libertad de información se refiere, en general, a los datos de la realidad, y la libertad de expresión tiene que ver con comunicar las propias ideas. Así, la libertad de expresión es una de las especies de la libertad de dar información y de formular opiniones.

La difusión por su parte quiere decir darle mayor amplitud al mensaje, que éste llegue a la mayor cantidad de destinatarios. Para este ejercicio están los distintos medios de comunicación: periódicos escritos, radio, televisión y otros.

Estas cuatro libertades son ejercidas como parte del juego democrático pues de les debe permitir sin autorización previa, censura ni impedimento. La autorización previa consiste en la necesidad de pedir un permiso antelado ante alguna autoridad para ejercitar el derecho, la que podrá autorizar o no dicho ejercicio. La previa censura es la revisión de lo que se va a informar, opinar, expresar o difundir, de manera que quien revisa puede impedir que el derecho sea ejercitado.

Si bien se prohíben las limitaciones, la Constitución señala que los derechos se ejercen bajo las responsabilidades de ley. Estas responsabilidades pueden ser administrativas (por ejemplo multas), civiles (indemnizaciones por daño causado) y penales (penas de diversa naturaleza).

En el segundo párrafo del inciso 4 se establece que los delitos cometidos por la prensa, el libro y demás medios de comunicación se tipifican en el Código Penal. También establece que estos delitos se juzgan en el fuero común con el fin de evitar que se instalen comisiones o tribunales especiales de juzgamiento se obstaculice o silencie la opinión y la información. La Constitución precisa también que es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente.

Si bien la Constitución reconoce los derechos de informar y opinar que comprenden los de fundar medios de comunicación, indudablemente, para ejercer este último derecho se necesita de importantes capitales y éstos están en manos de poderosos grupos económicos.

¿Hay límites al derecho de información y libertad de expresión?:

El punto más conflictivo y difícil del análisis de la libertad de expresión es: lo que es ejercicio legítimo de un derecho y lo que no lo es, y se torna prohibido e ilegal (Aguilar, 1990: 3). Y eso es porque puede determinar la diferencia entre un país democrático y otro que no lo es. Prohibir ciertas prácticas puede "desmocratizar" una estructura política.

Precisar constitucionalmente el contenido esencial de un derecho fundamental, conduce, a la teorización sobre el conflicto de derechos. Son valores superiores del ordenamiento jurídico, entre otros, la libertad y el pluralismo político.

La extensión de los derechos fundamentales a todos los ciudadanos, como derechos inherentes a la propia personalidad, exige que las limitaciones a su ejercicio sólo sean admisibles en la medida en que resulten estrictamente indispensables. **La limitación o suspensión de derechos fundamentales en una democracia, sólo se justifica en aras de la defensa de los propios derechos fundamentales** (Aguilar, 1990, 18-19).

Pero la libertad de expresión no es un derecho absoluto o ilimitado. Esas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en la misma Constitución, en especial, el derecho al honor,

intimidad, propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Sin embargo las limitaciones no se agotan ahí, pues también hay limitaciones señaladas en el Código Penal y otras leyes.

Sobre la situación especial del periodista consecuencia de su actividad profesional, la preservación de esta comunicación pública libre sin la cual no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular, exige la garantía de ciertos derechos fundamentales comunes a todos los ciudadanos pero también una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirvan.

La Constitución garantiza la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor), y, por otra parte, el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su naturaleza abstracta, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información.

Respecto a la labor del periodista debe seguir, debe tenerse en cuenta:

- 1) Tanto la libre comunicación de información como la libertad de expresión tienen una dimensión especial por su doble carácter de libertad individual y de garantía de la posibilidad de existencia de la opinión pública, unida al pluralismo político propio del Estado democrático.
- 2) En el enjuiciamiento de la corrección del ejercicio de estos derechos y libertades ha de tomarse en consideración la trascendencia pública o no de los hechos u opiniones emitidos y si la información que, en su caso, se ofrezca es o no veraz, habida cuenta de la relevancia de la información que reúne dichas características como base de una sociedad

democrática.

- 3) Entre los elementos a tener en cuenta en la valoración de la trascendencia pública de los hechos divulgados cobra relevancia la materia de la información, su interés público y su contribución a la formación de una opinión pública libre, así como el vehículo utilizado para difundir la información, en particular si éste es un medio de comunicación social.

- 4) La veracidad de la información no debe confundirse con una exigencia de concordancia con la realidad incontrovertible de los hechos, sino que en rigor, hace referencia a una diligente búsqueda de la verdad que asegure la seriedad del esfuerzo informativo; esta libertad no protege a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable al transmitir como hechos verdaderos simples rumores carentes de toda constatación o meras invenciones o insinuaciones insidiosas. Las noticias, para gozar de protección constitucional, deben ser diligentemente comprobadas y sustentadas en hechos objetivos.

La libertad de expresión tiene un doble significado. Su consideración como un derecho genérico ampara la libertad de comunicación, y como derecho de inmediato disfrute, no necesita de desarrollo legal ni de reconocimiento administrativo. La libertad de información y libertad de expresión no tiene porqué ser reconocido expresa y formalmente por la Administración, ya que el mismo nace directamente de la Constitución y su titular no tiene por consiguiente para ejercitarlo que esperar a un previo reconocimiento administrativo. Y ello porque como está configurada constitucionalmente, el ejercicio de la libertad no exige más que la pura y simple abstención por parte de la administración, la ausencia de trabas o impedimentos de ésta y no el reconocimiento formal y explícito de que tal libertad corresponde a sus respectivos titulares. Se trata de una de las libertades de los sujetos particulares que no exigen más que una mera actitud de no injerencia por parte de los poderes públicos (Escobar, 1998: 290).

Las libertades que hemos analizado no son sólo derechos fundamentales de la persona, sino que también significan el reconocimiento y garantía de

una opinión pública libre, elemento indispensable del pluralismo político de un Estado democrático, que por lo mismo trasciende el significado común y propio de los demás derechos fundamentales (Escobar, 1998: 291).

3 CONCLUSIONES:

¿Qué tan necesaria resulta la libertad de expresión dentro del contexto democrático? Es indispensable, ya que forma parte de sus requisitos constitutivos. No puede haber libertad de expresión si no hay libertad de información. Tampoco puede existir alguno de los dos si no se cuenta previamente con libertad ideológica. Si no podemos pensar con libertad, tampoco podemos expresar nuestros pensamientos ni opiniones. En este aspecto: ¿hasta dónde debe llegar la libertad de expresión?, ¿cuáles son sus límites?, ¿cuándo podemos restringir la libertad de expresión, sin descontextualizar el sistema democrático? ¿o acaso lo que debemos propender a una libertad de expresión irrestricta?

La honestidad, decencia, moralidad y el orden público son valores que no deben afectar la propagación de las ideas políticas y, en forma muy cautelosa, en lo referente a otros aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, existe el problema de delimitar que es idea política y que es lo que no lo es.

Y el derecho de información debe estar condicionado a que exista veracidad. La veracidad exige al menos, una comprobación razonable. Los datos transmitidos deben haber sido comprobados, es decir, que ha habido "diligencia" en la comprobación de los datos antes de su difusión. Este requisito puede ser usado para restringir la libertad de información, por lo que debe profundizarse su estudio con el fin de evitar que se convierta en algún mo-

mento en arma de un gobierno autoritario para impedir que la información se ponga en conocimiento de los ciudadanos. Deben ser leyes orgánicas o de amplio consenso, las que regulen su desarrollo y límites. El secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información si bien sólo deben darse en virtud de una resolución judicial, ésta debe estar limitada a casos excepcionalísimos y debe estar íntegramente reglada por ley, la cual no debe ser susceptible de cambios ni modificaciones por las mayorías parlamentarias de turno.

Prohibir ciertas prácticas informativas o de expresión de ideas puede "desmocratizar" una estructura política. Se puede perder "calidad democrática" o, incluso, volverse no democrático.

Precisar el contenido esencial de un derecho fundamental para conocer sus límites, conduce a la teorización sobre el conflicto de derechos.

Fuera de la veracidad exigida a la información, ambos derechos tienen como límite los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

La Constitución considera a la libertad de expresión e información no como derechos absolutos o ilimitados. El límite es el respeto a los derechos fundamentales, los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, el derecho al honor, intimidad, propia imagen y protección de la juventud e infancia.

Por otro lado, el requisito de veracidad de la información no debe confundirse con la exigencia de concordancia con la realidad incontrovertible de los hechos, sino que se refiere a una diligente búsqueda de la verdad que asegure la seriedad del esfuerzo informativo.

BIBLIOGRAFÍA:

ABAD MEDINA Juan & MARÍA CASTIGLIONI Franco: Crisis, Transformación y Nuevos Partidos Políticos. En: Metapolítica, vol.3, num.10, pp 313-332. (1999).

AGUILAR FERNÁNDEZ Antonio: La libertad de expresión del ciudadano y la libertad de prensa o información (posibilidades y límites constitucionales). Comares. (1990).

DAHL, Robert: La democracia. Una guía para los ciudadanos. Traducción de Fernando Vallespín. Taurus. (1998).

DAHL, Robert: La democracia y sus críticos. Paidós (1992).

ESCOBAR DE LA SERNA, Luis: Derecho de la Información. Dykinson. (1998).